

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ:	Magda Cristina Castañeda Parra
MEDIO DE CONTROL:	Reparación Directa
RADICACION No.:	110013343064-2017-00371-00
DEMANDANTE:	Beneficencia de Cundinamarca
DEMANDADO:	Asadero el Motorista No. 2
ASUNTO:	Deja sin valor ni efecto

EJECUTIVO
Deja sin valor ni efecto

I.- ANTECEDENTES

El 19 de diciembre de 2017 (fl. 28) la Beneficencia de Cundinamarca, presentó demanda ejecutiva contra el Asadero el Motorista No. 2, a fin de que se librara mandamiento de pago en su contra.

Mediante auto del 16 de agosto de 2018, este Despacho libró mandamiento de pago en contra del Asadero el Motorista No. 2, Felipe Parra y Segina Parra en calidad de representante legal de Marín S en C, éstos últimos en calidad de codeudores del contrato de arrendamiento No. 031-98, por la suma de \$48.767.226 más intereses moratorios. (fl. 42-46 C. Principal).

b. Consideraciones del Despacho

Pese a que la Ley 1437 de 2011 no establece una definición de lo que es un título ejecutivo, el artículo 297 de dicho estatuto sí determina con claridad cuáles son los títulos ejecutivos ejecutables en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuales se encuentran:

“(…)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo **los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.**

110013343064-2017-00371-00
 Beneficencia de Cundinamarca
 Asadero el Motorista No. 2
 Deja sin valor ni efecto

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar. " (Negrita del Despacho)

De igual forma, por remisión normativa consignada en los artículos 299 y 306 de la Ley 1437 de 2011 Código General del Proceso-, debe señalarse que en el inciso primero del artículo 422 de ésta última norma se hace alusión a los requisitos y condiciones que deben reunir los títulos ejecutivos, así:

"Art. 422. Título ejecutivo. **Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él**, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley."

El Consejo de Estado, respecto del título ejecutivo derivado de contratos estatales, indicó :

"...**Cuando se trata de la ejecución de obligaciones contractuales, el carácter expreso de un título que contenga las obligaciones debidas en dicha relación negocial, es difícilmente depositable en un solo Instrumento**, pues es tal la complejidad de las prestaciones debidas en esa relación, que se debe acudir a varios documentos que prueben palmaria e inequívocamente la realidad contractual. "Esta reunión de títulos que reflejan las distintas facetas de la relación contractual, es el título complejo, cuyo origen es el contrato en sí, complementado con los documentos que registre el desarrollo de las obligaciones nacidas del contrato." En el mismo sentido se expresó esta Sección, en una providencia más reciente; **"Es claro que si la base del cobro ejecutivo es un contrato, este debe, estar acompañado de una serie de documentos que lo complementen y den razón de su existencia, perfeccionamiento y ejecución."** (...)"¹

Adicionalmente, tratándose de contratos estatales de arrendamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que **no hay lugar a la cláusula de prórroga automática** de los mismos porque ello estaría en contravía de las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función administrativa. Expresamente, la Sección Tercera de la citada

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Providencia de 24 de enero de 2011. Rad.: 05001-23-31-000- 2009-00442-01(37,711). Actor: Empleamos S.A.

110013343064-2017-00371-00
Beneficencia de Cundinamarca
Asadero el Motorista No. 2
Deja sin valor ni efecto

Corporación en sentencia de 29 de octubre de 2014 emitida en el proceso 25000232600020010147701, dispuso:

“En primer lugar, la Sala reitera la jurisprudencia vigente en el sentido de que en el contrato de arrendamiento estatal no tiene lugar la cláusula de prórroga automática, ni la renovación tácita prevista en el artículo 2014 del Código Civil.

En orden de mayor jerarquía, esta subsección ha advertido que las referidas disposiciones no resultan aplicables en el contrato de arrendamiento estatal en la medida en que darían lugar un derecho de permanencia indefinida de la relación contractual, más allá de lo que se puede prever en esta clase de contratos estatales, en contravía de las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función administrativa consagrada en el orden constitucional (C.P., art. 209) e igualmente, se ha llegado a dicha conclusión teniendo en cuenta que este tipo de cláusulas del derecho común se apartan de los principios y fines de la contratación estatal, desarrollados en la Ley 80 expedida en 1993, entre otros, el deber de planeación, establecido en el referido régimen de contratación.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que la situación de hecho creada por la continuidad en la ejecución del contrato de arrendamiento una vez vencido el término, no tiene la idoneidad de configurar el contrato de arrendamiento estatal, por razón de la carencia del documento escrito que se exige como formalidad esencial del contrato estatal de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993”.

En el sublite, teniendo de presente la jurisprudencia en cita y como quiera que la obligación proviene de un contrato de arrendamiento (contrato estatal), el título ejecutivo es complejo, pues además del contrato también deben aportarse los demás documentos en los cuales se establezcan obligaciones claras, expresas y exigibles.

En el presente asunto, se libró mandamiento de pago el 16 de agosto de 2018, (fl. 43- 46 C. Principal), con base en el título ejecutivo complejo, conformado por los siguientes documentos:

-. Contrato de Arrendamiento No. 030 -98 del bien inmueble Lote No. 29 ubicado en la carrera 50 No. 23 -30, celebrado entre la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa y el Asadero el Motorista No. 02 Ltda, **suscrito el 30 de diciembre de 1998**, con vigencia de un año. (fl. 14-16 C. Principal), con

110013343064-2017-00371-00
 Beneficencia de Cundinamarca
 Asadero el Motorista No. 2
 Deja sin valor ni efecto

modificadorio No. 1 de fecha 5 enero de 1999, respecto del número de contrato el cual corresponde al 031 y no 030 (fl. 17 C. Principal).

-. Acta de cesión, endoso y traspaso del contrato de arrendamiento No. 031 de 1998 asadero el motorista No 2 Ltda, suscrito el **31 de marzo de 2009**, a través del cual la inmobiliaria cede, endosa y transpasa a la Beneficencia el contrato de arrendamiento citado. (fl. 18-20 C. Principal).

-. Acuerdo de pago suscrito el **día 6 de noviembre de 2009**, de una parte entre La beneficencia de Cundinamarca y de otra parte, Fernando Parra Marín en calidad de representante legal del Asadero el Motorista No. 2, Felipe Parra Marín y Sergina Marín de Parra en su calidad de representante legal de Parra Marín S en C, en el que se acordó el pago de \$160.767.226 (fl. 9-11 C. Principal).

-. Modificación del acuerdo de pago suscrito el día **12 de julio de 2011**, de una parte, entre La Beneficencia de Cundinamarca y de otra parte Fernando Parra Marín en calidad de representante legal del Asadero el Motorista No. 2, Felipe Parra Marín y Sergina Marín de Parra en su calidad de representante legal de Parra Marín S en C. (fl. 12-13 C. Principal).

En este caso, si bien la entidad ejecutante reclama los cánones de arrendamiento adeudados por valor de \$48.767.226, causados en virtud del contrato No. 031-98; lo cierto es, que revisado el contrato de arrendamiento allegado como título ejecutivo suscrito el 1 de enero de 1998, se observa que en la cláusula novena de dicho documento, se acordó que el contrato tendría una duración de un (1) año a partir del 1o de enero de 1999 hasta el 30 de diciembre de 1999; y pese a que con la solicitud del mandamiento de pago se aportaron documentos que dan cuenta de la continuación de la relación contractual después de la terminación del contrato (30 de diciembre de 1999), como acuerdos de pago, el ultimo celebrado el **12 de julio de 2011**, debe entender el despacho que la obligación que se pretende ejecutar corresponde a la del año de duración del contrato ya referido.

Ahora bien, con las documentales aportadas como título ejecutivo complejo, advierte el Despacho que el contrato de arrendamiento No. 031 de 1998, con término de ejecución hasta el 30 de Diciembre de 1999, y sus acuerdos de pago, no ofrecen la certeza de que la obligación que reclama la Beneficencia de Cundinamarca resulte exigible. Lo anterior, como quiera que no se aportaron documentos que soportaran el hecho de que el contrato hubiese sido prorrogado, o se hubieren celebrado otros contratos de arrendamiento entre la Beneficencia y el ejecutado respecto del mismo bien y, por tanto, que en razón de los mismos, la parte ejecutada adeude cánones a la Beneficencia.

110013343064-2017-00371-00
 Beneficencia de Cundinamarca
 Asadero el Motorista No. 2
 Deja sin valor ni efecto

Así las cosas, el referido contrato habría terminado el **30 de diciembre de 1999**. En ese orden, se advierte como se explicó en forma precedente, que los contratos de arrendamiento estatales no están sujetos a la prórroga automática, en tanto que debe mediar la celebración de un nuevo contrato. En tal caso, el término para la presentación de la demanda estaría caducado si se tiene en cuenta que desde la terminación del contrato el 30 de diciembre de 1999, hasta la presentación de la demanda 19 de diciembre de 2017, según acta de reparto vista a folio 28 del plenario, transcurrieron más de cinco (5) años.

Lo anterior, de conformidad con el literal k) del artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de **cinco (5) años contados** a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

Ahora bien, revisado el título ejecutivo base del mandamiento de pago, evidencia este Despacho que la acción ejecutiva se encontraba **caducada**, al momento de presentarse la demanda, y si bien es cierto, la caducidad puede ser tramitada como excepción previa a solicitud del ejecutado, no es procedente tramitar un proceso y desgastar la administración de justicia, en orden a arribar a una misma conclusión. En este orden de ideas, corresponde al Juez revisar la existencia de la demanda en forma, para que más adelante no sobrevengan nulidades o defectos sustanciales que impidan resolver de fondo el asunto.

En gracia de discusión, debe señalarse que los documentos aportados (**contrato de arrendamiento No. 031 de 1998, acuerdo de pago del 6 de noviembre de 2009, modificadorio del acuerdo de pago del 12 de julio de 2011 y acta de cesión del 31 de marzo de 2009**) no integran el título ejecutivo complejo exigido para el caso de autos, pues no fue aportado como documento integrante del título, la garantía constituida para avalar el cumplimiento de la obligación, según la cláusula vigésimo tercera del contrato. Tampoco, se presentó la resolución que declaró el incumplimiento del contrato, ni las actas de liquidación. Por lo que para el Despacho el título ejecutivo no se aportó en debida forma, a fin de proceder a librar el mandamiento de pago.

Ahora, el Consejo de Estado ha precisado que, *“tratándose de títulos ejecutivos complejos, la carga de acreditar la integración del título recae sobre el acreedor; al juez solo le está dado librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados prestan mérito ejecutivo”*².

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto de 14 de junio de 2019, exp. 61.805.

110013343064-2017-00371-00
 Beneficencia de Cundinamarca
 Asadero el Motorista No. 2
 Deja sin valor ni efecto

Con todo, el ejecutante no aportó la totalidad de documentos que den cuenta de la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que permitieran al despacho proceder a librar el mandamiento de pago solicitado.

Así las cosas, verificada la ocurrencia de la caducidad del medio de control y además, la falta de documento idóneo que sirva de fundamento para la ejecución –no se integró en debida forma el título ejecutivo–, este Despacho dejará sin valor ni efecto el auto de fecha 16 de agosto de 2018, por medio del cual se libró mandamiento de pago, dentro del presente asunto.

La anterior decisión soportada en el principio que establece que **“el acto ilegal no ata al juez”**. Sobre el particular, el Consejo de Estado mediante sentencia 30 de agosto de 2012, señaló:

“ (...)

*Varias han sido las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en el sentido de que, “**el auto ilegal no vincula procesalmente al juez en cuanto es inexistente**”; y en consecuencia, “**la actuación irregular del juez, en un proceso, no puede atarlo en el mismo para que siga cometiendo errores**”³.*”

Y en sentencia del 13 de octubre de 2016, con ponencia de la Dra. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, dentro del proceso radicado No. 47001-23-33-000-2013- 90066-01(21901), a propósito del tema en cuestión, se dijo:

*“...la Corte Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial una excepción fundada en **que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez**⁴. Dicho criterio, por supuesto, debe obedecer a condiciones eminentemente restrictivas, para que el operador jurídico no resulte modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros, con fundamento en providencias judiciales, ni desconociendo normas de orden público como tampoco el principio de preclusión de las etapas procesales⁵. **Por tanto, la aplicación de esa figura supone estar frente a una decisión manifiestamente ilegal, que represente una grave amenaza del orden jurídico**(...)⁶.*”

³ Auto, Sección Tercera, Consejo de Estado, Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. FECHA: 04/06/24. Radicación: 08001-23-31- 000-2000-2482-01

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 28 de 1979 M. P. Alberto Ospina Botero; Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 M. P. Héctor Gómez Uribe; Auto No. 122 del 16 de junio de 1999 M. P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Sentencia 096 del 24 de mayo de 2001 M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno, entre muchas otras.

⁵ T-519 de 2005

⁶ T-1274 de 2005

110013343064-2017-00371-00
Beneficencia de Cundinamarca
Asadero el Motorista No. 2
Deja sin valor ni efecto

Al no cobrar ejecutoria los actos ilegales por afectarse de una evidente o palmaria ilegalidad, tampoco constituyen ley del proceso ni hacen tránsito a cosa juzgada."

Así las cosas, la posibilidad de dejar sin efectos un auto que ya se encuentra ejecutoriado, no constituye un capricho del juez, ni una situación en virtud de la cual eventualmente, se pueden ver afectados o vulnerados derechos de las partes, pues como bien lo señala la jurisprudencia⁷, dicho acto procede cuando se está frente a una decisión manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jurídico.

Tal circunstancia se estructura en el presente caso, como quiera que para ordenar librar el mandamiento de pago en el auto de 16 de agosto de 2018, no se tuvo en cuenta que el término para solicitar la ejecución ya habría caducado, amén de que el título ejecutivo presentado, lo fue, sin la totalidad de los documentos exigidos para que fuera considerado un título complejo, como ya se advirtió en líneas precedentes.

En consecuencia, el **JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

- 1.- DEJAR SIN VALOR NI EFECTO** el auto de fecha 16 de agosto de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
- 2.- NEGAR** el mandamiento de pago solicitado por la Beneficencia de Cundinamarca en contra del Asadero el Motorista No. 2, representado por Felipe Parra Marín; Felipe Parra y Sergina Parra en calidad de representante legal de Marín S en C.
- 3.-** En firme la presente providencia **ARCHIVAR** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
Juez

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección C, 03 de mayo de 2012, MP Enrique Gil Botero Rad. 05001-23-31-000-2000-01720-02 (42954)